

Plan de reconstrucción: un nuevo comienzo para el gobierno

Se esperaba que el martes pasado el gobierno hubiese presentado ante el Congreso su plan de "reconstrucción nacional y reactivación económica" -que contempla más de cuarenta medidas que abarcan ámbitos muy diversos-, pero finalmente fue postergado para la próxima semana, debido a la necesidad de sensibilizarlo mejor con parlamentarios del oficialismo como también de oposición, y a su vez tratar de ganar tiempo para despejar dudas que han surgido sobre la pertinencia de presentar tal volumen de propuestas en una sola iniciativa.

Se trata previsiblemente del proyecto de ley más crucial de esta administración, pues contiene varias de las principales propuestas que están recogidas en el programa de gobierno y que fueron eje de la campaña bajo la promesa de mayor crecimiento y bienestar para la población, como por ejemplo una rebaja del impuesto corporativo de 27% a 23%, medidas para agilizar la reconstrucción de viviendas afectadas por los recientes incendios forestales, eliminar el IVA para la compra de viviendas durante un período acotado y seguir reduciendo aquellas barreras que limitan la inversión.

Es evidente entonces que para el gobierno del Presidente José Antonio Kast hay mucho en juego aquí, en una doble dimensión: por una parte, será la instancia para clavar sus banderas programáticas y marcar así el rumbo de lo que será su gestión económica e institucional en estos cuatro años, pero también abrirá una oportunidad para intentar un nuevo comienzo del gobierno, que deje atrás el mal sabor que han dejado los varios tropiezos cometidos tanto en gestión política como en el plano comunicacional en este primer mes.

Es un hecho que estos errores -que en algunos casos han recordado el amateurismo que tanto se criticó de la administración anterior- le han generado un daño importante al gobierno, lo que claramente se refleja en la acelerada pérdida de adhesión ciudadana, como también en la incomodidad de algunos sectores del oficialismo, que han hecho públicas sus críticas. Desde luego, y tal como ya se indicó en estas mismas páginas, ha llamado la atención que estos cuestionamientos se hayan hecho tan tempranamente, pero sobre todo sin mayor disimulo, lo que indica que en las propias fuerzas oficialistas hay sectores que todavía no han logrado asimilar la importancia de la lealtad básica que se debe a su propio gobierno, todo lo cual ha terminado por realzar más esta cadena de errores propios y generar cierta sensación de desorden.

Por eso este proyecto tiene el potencial de generar el efecto de una especie de "borrón y cuenta nueva", que permita ordenar tanto al Ejecutivo como a sus propias fuerzas políticas en torno a estos objetivos centrales y comenzar a

poner la mirada hacia adelante. Es una ventana que el oficialismo no debería desaprovechar, y para que surta efecto no solo será indispensable una actitud de mayor generosidad de las propias fuerzas de derecha -que evite seguir poniendo el acento en las fallas o en aquellos aspectos que generan divergencias-, sino también velar por que los detalles de esta reforma sean técnicamente impecables -es claro que si aquí se busca transmitir que esta administración vino a marcar una diferencia en cómo reactivar el país entonces no hay margen para el error-, y cuidar de que exista una muy buena comunicación de sus beneficios.

De allí que resulte razonable que el Ejecutivo haya optado por darse más tiempo y robustecer los apoyos sobre todo dentro de su propia fuerza parlamentaria, a la que necesita tener muy alineada detrás de sí, porque bastaría el descuelgue de unos pocos votos oficialistas para que la aprobación de esta iniciativa se ponga definitivamente cuesta arriba.

Eso por de pronto implica que el gobierno debería desplegar un trabajo comunicacional mucho más fino, tal que los parlamentarios tengan una mejor comprensión de la importancia que estas medidas tienen para el país, y el por qué cada una de ellas guarda coherencia con el objetivo de reactivar la economía.

También será necesario reforzar el trabajo con la ciudadanía, que por ahora recibe el mensaje de que, por una parte, "no hay plata" en la caja fiscal, pero en paralelo se busca bajar el impuesto a las empresas, lo que hábilmente ha sido aprovechado por la oposición para instalar que se trata de un abierto contrasentido que perjudica a los chilenos. El gobierno deberá desplegar una estrategia para poder convencer de que con reformas que estimulen la inversión las posibilidades de reactivar la economía son mayores, y que en esa misma medida aumentan las chances de poder encontrar empleos de mayor calidad y mejorarán los ingresos de las familias. La variable laboral es, de hecho, sumamente sensible para la población, como lo mostró un estudio de la Mutual de Seguridad, Cadem y la UAI publicado el año pasado, el cual reveló

que la estabilidad laboral y económica es la principal aspiración de los chilenos y a la vez su mayor temor. Si el conjunto de reformas que va a proponer el Ejecutivo finalmente no le hace sentido a la ciudadanía, es poco probable que encuentre eco en el Congreso.

Luego de esta especie de "partida en falso" que ha tenido el gobierno, cabe esperar que se hayan internalizado las lecciones sobre la importancia de hacer una mejor gestión política y saber comunicar de manera más efectiva. La presentación de este proyecto de ley será la oportunidad del oficialismo para demostrarlo.

El proyecto sobre reconstrucción nacional y reactivación económica le abre una ventana al oficialismo para ordenarse en torno a los objetivos centrales del programa de gobierno, y así tratar de dejar atrás el complejo primer mes de gestión. Clave será que el proyecto no solo sea técnicamente impecable, sino que logre comunicarse bien.